

Colombia en Guerra

por Fernando Mora

Colombia ya no enfrenta únicamente inestabilidad política o fallas en la gobernanza: está en guerra. Ha emergido un conflicto nacional y multifacético, que involucra a grupos armados ilegales, carteles del narcotráfico, milicias con motivaciones políticas, y un aparato estatal que, bajo el gobierno del presidente Petro, ha borrado la línea entre el poder político y la complicidad criminal.

No se trata de una guerra metafórica, sino de una confrontación armada real, que se libra en ciudades, universidades, selvas y espacios digitales, donde la ley ha dejado de ser el árbitro de la autoridad. Colombia, en 2025, es un país asediado desde adentro.

Grupos armados ilegales y redes del crimen organizado operan en los 32 departamentos del país, con un control territorial cada vez más coordinado. Entre ellos se encuentran el ELN, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, el Tren de Aragua y más de 20 organizaciones de narcotráfico y el tráfico de seres humanos, muchas de las cuales han sido políticamente legitimadas bajo la llamada iniciativa de “Paz Total” del presidente Petro.

Lejos de dismantelar las redes criminales, el Estado ha negociado con ellas y las ha empoderado, muchas veces en secreto, sin escrutinio público, sin supervisión institucional y al margen del proceso democrático. Lo que el gobierno de Petro llama “paz” es, en realidad, una rendición de la soberanía.

Las tácticas de guerra urbana han regresado a las principales ciudades, especialmente a través de las acciones violentas de la *Primera Línea*: una fuerza militante apoyada por la coalición política de Petro desde 2019. Con un brazo armado de encapuchados, este grupo no actúa como un movimiento de protesta, sino como una extensión paramilitar de facciones de izquierda políticas radicales.

Estos actores han tomado el control de universidades públicas, impuesto la conformidad ideológica mediante la intimidación, y protagonizado actos de violencia callejera para suprimir la disidencia.

La supuesta “movilización social” que promueven es una campaña de coerción, no de participación democrática.

El colapso del control estatal es particularmente evidente en las regiones rurales y de frontera. Territorios como La Guajira, Arauca, Catatumbo, Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Urabá, el Cesar, la Sierra Nevada, entre otros, se han convertido en zonas de guerra –controladas no por el gobierno, sino por grupos criminales que operan con armas de grado militar, apoyo logístico extranjero y con casi total impunidad.

Estos actores imponen sistemas paralelos de justicia, recaudan impuestos y controlan economías completas basadas en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Los civiles –particularmente mujeres y niños– son las principales víctimas. Solo en 2024, más de 14.000 niños fueron víctimas de abuso sexual, mientras que las entidades del Estado encargadas de protegerlos han sido politizadas y dismanteladas funcionalmente.

Esta guerra no se limita al territorio colombiano. Es transnacional. El aliado internacional más cercano del gobierno Petro es el dictador venezolano Maduro, bajo cuyo régimen los grupos armados colombianos, como el ELN y las disidencias de las FARC, encuentran santuario, entrenamiento y financiamiento. La nueva alineación diplomática de Colombia incluye relaciones crecientes con Irán, Hezbolá, Hamas e incluso apoyo indirecto a la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.

Estas relaciones no solo comprometen la soberanía nacional: incrustan a Colombia dentro de una red de regímenes autoritarios y grupos extremistas que amenazan la estabilidad regional y global.

La guerra digital también es un frente central de este conflicto. Desde 2019, el movimiento político de Petro ha dependido fuertemente de redes de desinformación –muchas de ellas creadas originalmente por los servicios de inteligencia de Maduro. Estas máquinas de propaganda automatizadas manipulan la opinión pública, intimidan a la prensa y socavan la legitimidad institucional.

En 2022, este ejército digital se expandió utilizando fondos públicos colombianos, convirtiendo la infraestructura estatal de comunicaciones en un arma contra sus propios ciudadanos.

Incluso el concepto de responsabilidad política ha colapsado. El asesinato del líder opositor y candidato presidencial *Miguel Uribe* fue precedido por una campaña sostenida de difamación, vigilancia y acoso digital –ejecutada con total impunidad. La escolta estatal asignada a Uribe fue deliberadamente reducida por el gobierno de Petro semanas antes de su asesinato.

Menos de dos meses después, la senadora *Paloma Valencia* –también candidata presidencial– está siendo sometida a un patrón similar de persecución. En regiones como Saravena, Arauca, grupos armados alineados con el gobierno ya actúan para reprimir las campañas de la oposición de cara a las elecciones de 2026.

El descenso de Colombia hacia la guerra no es accidental: es el resultado de políticas deliberadas. Bajo la bandera de la “Paz Total”, el presidente Petro ha construido una estructura de poder paralela en la que el Estado comparte autoridad con actores criminales.

Estos grupos ahora proporcionan control territorial, apoyo electoral y financiamiento para sostener un proyecto político cada vez más autoritario y antidemocrático. Lo que Petro ha construido no es paz, sino un campo de batalla donde convergen el crimen organizado, el extremismo ideológico y la complicidad estatal.

Esta guerra no se libra solo con balas y bombas, sino también con propaganda, sabotaje institucional y silencio estratégico.

La administración Petro ha desfinanciado o cooptado instituciones que antes garantizaban el Estado de derecho –cortes, entidades de protección infantil y autoridades electorales–, mientras dirige la ayuda

internacional hacia proyectos revisionistas y campañas mediáticas de autoglorificación.

Museos, escuelas y producciones estatales ahora mitifican la vida e ideología de Petro, mientras ignoran o borran a las verdaderas víctimas del conflicto: los civiles atrapados entre el fuego cruzado del crimen y la política.

La comunidad internacional debe entender esto por lo que realmente es: un conflicto interno complejo, de alta intensidad –alimentado por las drogas, la ideología, la injerencia extranjera y la traición del Estado. Colombia está en guerra. Y el gobierno de Petro no solo ha fallado en detenerla –está reorganizando el Estado para operar en paralelo a ella.

Es necesaria una recalibración del compromiso internacional. El apoyo externo debe ser condicionado al restablecimiento del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza, al desmantelamiento de las redes criminales, y a la protección plena de la oposición política.

La ayuda internacional debe ser auditada y redirigida hacia las víctimas, no hacia propaganda revisionista. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y las instituciones multilaterales deben abrir investigaciones independientes sobre la violencia política, la guerra digital y la expansión de la influencia extremista extranjera en Colombia.

La guerra de Colombia no es invisible. Se transmite por televisión, por redes sociales y en tiempo real. Se libra en aulas, selvas, juzgados y líneas de tiempo digitales. La pregunta ya no es si Colombia está en guerra. Es si el mundo lo reconocerá –y actuará antes de que su democracia se pierda por completo.

Bogotá, Colombia, 2 de octubre de 2025